
México y Venezuela: posguerra y modernidad

FELÍCITAS LÓPEZ PORTILLO T.

Ante los tiempos que corren, cuando se implanta un nuevo modelo de desarrollo que se considera definitivo y panacea para todos nuestros males, quizá no sea ocioso volver los ojos al no tan lejano pasado de la década del cuarenta y examinar lo que significó el modelo desarrollista consolidado en esos años, en comparación con su presente antinomia.

En efecto, durante la Segunda Guerra Mundial y en la inmediata posguerra, en América Latina hubo ocasión para el optimismo. Las divisas generadas durante el conflicto bélico y las esperanzas levantadas por el triunfo de las democracias sobre el nazifascismo alentaron la ilusión de que se vivirían tiempos mejores y de que, ahora sí, nuestros países se orientarían hacia la modernización económica con base en la industrialización, lo que a su vez acarrearía el reino de la abundancia para todos y los efectivos goces de la libertad política. Se apostó a la industrialización por sustitución de importaciones y al establecimiento de industrias básicas, bajo los auspicios de un decidido intervencionismo estatal que pretendía el logro de la independencia económica y el mejoramiento del nivel de vida de las mayorías.

Concretamente en México y Venezuela coinciden las fechas en que se implanta este modelo de

desarrollo. En el primer caso, en 1946 asciende a la presidencia de la República el licenciado Miguel Alemán, el primer civil y el primer universitario de los regímenes posrevolucionarios que llega a la primera magistratura. Encabezaba un equipo de trabajo homogéneo, formado por tecnócratas, entre los que figuraban no pocos integrantes de la iniciativa privada, y cuyo promedio de edad era de 42.5 años. Atrás quedaban los viejos caudillos militares; muchos de ellos desaparecidos, otros demasiado ancianos para figurar en el escenario político. El turno correspondía ahora a los "cachorros de la revolución".

Desde el principio de su campaña, el candidato oficial señaló que su objetivo era alcanzar el crecimiento económico y la democratización política, metas que a su vez redundarían en la superación del atraso, la miseria y la ignorancia que abatían al pueblo mexicano.

Las metas que nos proponemos, si el voto libre del pueblo nos confía la responsabilidad del gobierno, son en resumen: el enriquecimiento del país, la lucha contra la pobreza y la abolición de la miseria; la elevación del saber en todos sus grados, desde la desanalfabetización hasta la alta cultura y la técnica, las ciencias y las artes; el mantenimiento de las reformas sociales en favor de la clase trabajadora de la ciudad y del campo, que son realizaciones respetables; el fortalecimiento de las libertades humanas y los derechos políticos y una administración de justicia imparcial, expedita y honrada.¹

Según el nuevo equipo gobernante, la Revolución mexicana había llegado ya a una etapa de su desarrollo histórico en que era imperiosa la

FELÍCITAS LÓPEZ PORTILLO T. *Profesora-investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del CCYDEL. Autora de diversos artículos y libros sobre temas latinoamericanos.*

necesidad de impulsar el crecimiento económico, sustentado en el principio ético de mejorar integralmente la calidad de vida de la población. Este estaría fundamentalmente a cargo de la iniciativa privada, pero con una fuerte presencia de intervencionismo estatal, política que buscaba aminorar las consecuencias sociales de un acelerado desarrollo capitalista, a la vez que el Estado se hacía cargo de las industrias básicas y de la infraestructura necesarias para el mejor desenvolvimiento de los negocios privados.

Como declaraba Miguel Alemán: "Los principios de la revolución mexicana son nuestros principios. Nuestro programa aspira a realizar la etapa del desenvolvimiento económico del país dictado por la revolución."² Para lograr tal fin se buscó seguir el ejemplo de los países desarrollados —especialmente los Estados Unidos— en el entendido de que el impulso al sector terciario era la única receta efectiva para sacarnos de la pobreza y del atraso. Por ello el gobierno alemanista se abocó a dar la batalla por la industrialización. En los foros internacionales se defendió vehementemente el derecho de los pueblos atrasados a mejorar su situación económica,

mientras internamente se ponían las bases para una economía que se quería armónica e integrada, sustentada en la política de sustitución de importaciones. El contexto internacional de posguerra no facilitaba esta lucha por la superación económica, sino todo lo contrario. La potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial presentaba al libre cambio como la panacea para los males que aquejaban a nuestros países, posición que amenazaba convertirnos para siempre en exportadores de materias primas e importadores de productos manufacturados, en una situación de agudo deterioro de los términos de intercambio.

El campo sería el pivote donde descansaría el programa industrial. Para tal fin, se incrementó la productividad agrícola con objeto de lograr la autosuficiencia alimentaria y la dotación de materias primas agrícolas necesarias a la industria, además de aumentar la exportación de productos agropecuarios. Se proyectaron grandes inversiones en sistemas de riego, en la red de comunicaciones y en los servicios de extensión agrícola para que los campesinos conocieran las ventajas de las semillas mejoradas, del empleo de maquinaria y del mejoramiento genético del ganado. El mejor nivel de vida del campesinado propiciaría a su vez el crecimiento del mercado interno, cuyas demandas podrían satisfacerse, principalmente, con la industria nacional de bienes de consumo. Los industriales nacionales podían asociarse al capital extranjero, pero este debería sujetarse a las leyes y normas del país. En atención a que la industria requeriría personal calificado, se preveía el establecimiento de tecnológicos y escuelas técnicas por todo el territorio nacional y se buscaba simultáneamente dar un mayor impulso a la educación, ya que el principal obstáculo para la modernización era la ignorancia del pueblo.

Las grandes obras públicas fueron la tónica del sexenio, orientadas sobre todo a paliar la escasez de bienes de capital y de insumos intermedios, tarea que estuvo a cargo de NAFINSA, la cual financió la construcción de plantas de generación de energía eléctrica, de Altos Hornos de México, de fertilizantes, de cemento y aparatos eléctricos, de ingenios azucareros, de empacadoras de carne, de textiles sintéticos, de plantas químicas y de papel y celulosa, además de proporcionar financiamiento a la industria privada. La infraestructura también



recibió atención especial, sobre todo en cuanto a la construcción y modernización de vías de comunicación, y la creación de polos de desarrollo en zonas ricas en recursos y escasamente pobladas, como las obras emprendidas en las cuencas de los ríos Tepalcatepec, Papaloapan y Grijalva.

Miguel Alemán llegó al poder con un país deslastrado de las turbulencias sociales ocasionadas por la política radical-reformista del general Lázaro Cárdenas y de cara a un mundo en recomposición, con el consolidado y creciente poderío del vecino del norte. En la década del cuarenta se afirmaron los rasgos característicos del sistema político mexicano que dieron lugar a la edad de oro del "desarrollo estabilizador": presidencialismo civil, partido oficial, fomento y control institucional de las organizaciones populares, amplia intervención del Estado en la promoción de la economía, la cultura y la organización de la sociedad.³ En el alemanismo se dio la puntilla a la izquierda oficial, se controló al movimiento obrero mediante el "charrismo" y se otorgaron concesiones al liderazgo sectorial del PRI como premio a la domesticación y encuadramiento corporativo de obreros y campesinos, consolidándose la preeminencia del Ejecutivo en el sistema político, el cual había vivido su primer momento estelar cuando Calles fue expulsado por don Lázaro. La democratización política se sacrificó en aras del crecimiento económico, pues la "paz social" era necesaria si se quería acceder al desarrollo.

El ambicioso proyecto modernizante del alemanismo estuvo enmarcado en un discurso nacionalista, que giraba alrededor de la "mexicanidad". Esta subjetiva expresión significaba que los regímenes revolucionarios emanaban de la entraña misma del pueblo, que es profundamente nacionalista. Se hacía hincapié en la necesidad de fortalecer y defender los valores propios de nuestra cultura, lo que a su vez suponía confiar en el esfuerzo creador de todos los mexicanos. El gobierno mexicano se adscribió al lado del mundo "occidental y cristiano" en la guerra fría y el discurso oficial se hizo eco de este clima internacional; sin embargo, esta retórica adquirió un estilo propio que destacaba los valores patrios y la doctrina de la "mexicanidad", elementos necesarios para sacar adelante al país en su batalla por el progreso y en la lucha para ganar prestancia en los foros

internacionales. Por ello, el tema de la revolución mexicana siguió campeando en los discursos.

Recordemos que el enorme impulso otorgado a la modernización material del país fue posible gracias a la labor de los regímenes anteriores, el de Cárdenas en primer término, que con la reforma agraria y la nacionalización petrolera sentó las bases del desarrollo histórico posterior, aunque valga la aclaración que el proyecto de desarrollo implantado por la gestión alemanista dejó de lado la amplia participación popular propiciada por el cardenismo, lo mismo que su visión de una nación modesta y autosuficiente.

Durante el periodo alemanista se buscó la modernización del capitalismo mexicano a través de un Estado crecientemente intervencionista y de un aparato industrial protegido y dirigido al mercado interno; se puso también gran atención a procurar el aumento de la productividad agrícola. Se fortaleció la burguesía industrial a través del estímulo estatal, se consolidó una próspera burguesía rural dedicada a los cultivos de exportación en el norte y el noroeste del país, donde se invirtió la mayor parte



del presupuesto orientado a obras de riego y ampliación de la superficie cultivable. Se estableció un férreo control sobre el movimiento obrero, las clases medias experimentaron un importante crecimiento y el capital extranjero penetró en ramas anteriormente reservadas al capital nacional, lo que ocurrió sin que se abandonara la retórica revolucionaria de la justicia social. Como escribe la investigadora Blanca Torres: “no tardó el gobierno en reconocer abiertamente la prioridad que otorgaba al crecimiento económico, al aumento de la inversión y de la producción, dejando entrever que la distribución de los beneficios vendría después, sin precisarse ya qué tan larga sería la espera”.⁴

El enorme impulso dado al crecimiento económico se contemplaba como un requerimiento histórico. En 1950 Miguel Alemán declaró a un periodista: “Mi régimen no podía dejar de realizar lo que ha realizado. Le correspondía, como una inevitable imposición histórica. Estamos en el momento culminante de nuestro progreso. O mejor aún: en el momento supremo de nuestro impulso, que ya no puede detenerse.”⁵

Los frutos del esfuerzo emprendido en pos de la superación económica de México se verían más adelante, cuando las inversiones en la infraestructura y las industrias básicas rindieran cabalmente su cometido.⁶ Sin embargo, a finales del sexenio había preocupación porque los beneficios del crecimiento económico no se habían repartido equitativamente, pues la constante habían sido las grandes utilidades y la merma de la posición del factor trabajo en el ingreso nacional. Por ello Ramón Beteta —el poderoso secretario de Hacienda del régimen, reputado como su ideólogo— afirmó, en su última intervención ante la cúpula empresarial en ocasión de la XVIII Convención Nacional Bancaria celebrada en abril de 1952, que durante el gobierno a punto de concluir el sector privado se había visto estimulado “por las obras públicas, por sistemas de impuestos moderados y equitativos y por una protección arancelaria suficiente”, mas a pesar de los esfuerzos hechos por la administración alemanista y por los anteriores regímenes revolucionarios, “todavía prevalece en nuestra patria una injusta distribución de la riqueza y una inequitativa repartición del ingreso nacional”.⁷

El proyecto modernizante en Venezuela

En octubre de 1945 el partido Acción Democrática y las jerarquías medias del Ejército llegaron al poder en Venezuela a través de un golpe de Estado, con lo que se liquidó políticamente al gomecismo. Esta organización política, nacida en 1941 bajo la presidencia del eminente escritor Rómulo Gallegos y con una plataforma programática de contenido avanzado para la época, nacionalista, antimperalista y policlasista, era expresión de las nacientes clases medias urbanas que en 1928 protagonizaron un importante movimiento antidictatorial. Sin embargo, su principal inspirador era Rómulo Betancourt, la máxima figura política venezolana de este siglo.

El proyecto modernizante postulado por AD, que encabezaba la Junta Revolucionaria de Gobierno formada a partir del derrocamiento del general Isaías Medina Angarita, se proponía materializar la fórmula de “sembrar el petróleo” a través del “comienzo de desarrollo integral de la producción realmente venezolana; reforzar el régimen de propiedad agraria; aumentar la población, domiciliarla, educarla y proteger su salud”.⁸

Por su parte, los militares jóvenes aliados a Acción Democrática se encontraban inconformes con la gestión gubernamental del general Medina Angarita (1941-1945), quien defraudó sus esperanzas de mejoramiento profesional y económico. En el origen de esta alianza cívico militar también tuvo que ver el hecho de que las altas jerarquías estuvieran copadas por los antiguos jefes de montonera, la mayoría provenientes de los viejos cuadros del gomecismo, por lo que aquellos veían frustradas sus aspiraciones de ascenso, a pesar de su mayor capacitación profesional.

En los tres años de gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948), AD se convirtió en el mayor partido de masas de Venezuela, con amplia base campesina, obrera y de clases medias urbanas. Durante este periodo se adoptaron las medidas que reclamaba Venezuela para su superación: se democratizó el sistema político con el otorgamiento del derecho al sufragio universal y secreto a toda la población mayor de 18 años, sin exclusión de mujeres y analfabetos; se amplió la intervención del Estado con la

revitalización de las empresas gubernamentales ya existentes y la creación de otras nuevas, a fin de diversificar la economía; se hicieron grandes esfuerzos en pro de la elevación de los niveles educativos y sanitarios del pueblo venezolano; no se otorgaron nuevas concesiones petroleras y se aumentó la participación del Estado en las ganancias de las compañías petroleras extranjeras; se hizo la guerra al peculado, un mérito considerable, sobre todo si se toma en cuenta que en nuestra región una parte importante de la acumulación de capital de nuestras burguesías pasa por las oficinas públicas.

En diciembre de 1947 Rómulo Gallegos fue elegido presidente de la República; eran las primeras elecciones libres celebradas en lo que iba del siglo. Desde un principio puntualizó lo que iba a ser la principal tarea de su régimen: "Educar, sanear y abastecer, serán preocupación predominante, una y trina, de mi gobierno".⁹ Sin embargo, no tuvo tiempo de concluir su periodo. El 24 de noviembre de 1948 un cuartelazo terminó con su gestión presidencial, golpe de Estado realizado por los mismos militares que en octubre de 1945 llegaron al poder en compañía de los civiles comandados por Acción Democrática.

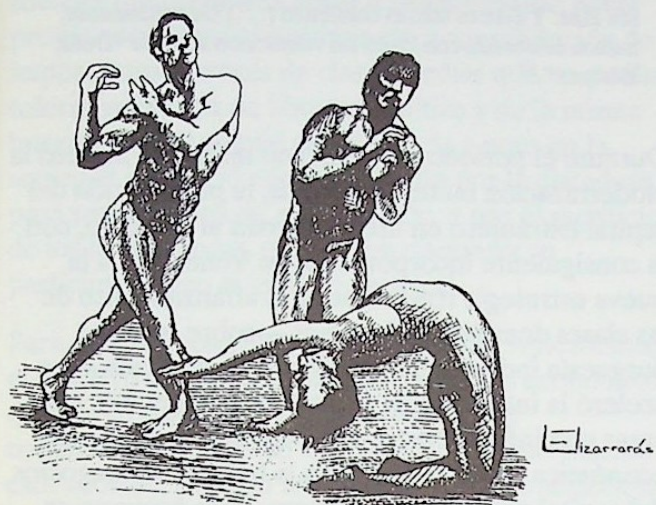
Varios factores se conjugaron para que los militares dieran la asonada, entre los que se cuentan las contradicciones generadas en el seno del bloque dominante impuesto a partir de octubre de 1945, las que arrancaban desde el predominio adeísta en la composición de la Junta Revolucionaria, las querellas entre los partidos políticos, el "efecto demostración" de otros golpes militares habidos a lo largo de 1948 en diversos países latinoamericanos, la tradición castrense de gobierno, errores de conducción política, un clima internacional favorable y el hecho de que la democracia no estaba en pañales, sino en gestación, lo que dio al traste con el gobierno de Gallegos a los nueve meses de iniciado este.

Con motivo del golpe se formó una Junta Militar integrada por los mayores Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, bajo la presidencia de Carlos Delgado Chabaud. Desde el principio se perfilaron dos corrientes contradictorias en el seno de dicha Junta: una pugnaba por la celebración de elecciones y la cesión del poder al ciudadano elegido, y la otra postulaba la línea dura de no

traspasar el poder a los civiles dada la ineficacia y demagogia que —en su concepto— había caracterizado la gestión anterior. El portavoz de esta corriente era Marcos Pérez Jiménez, titular de la cartera de Defensa, cargo que le permitía estar en estrecho contacto con el resto de los jefes y oficiales del Ejército que, en su mayoría, eran como él de origen andino. Esta corriente temía que una vez entregado el poder a los civiles, estos se dedicaran de nuevo a la demagogia y al clientelismo electoral con el dinero de la nación, dejando de lado lo que consideraban el verdadero reto a enfrentar: el atraso en que se encontraba Venezuela en comparación con otros países latinoamericanos, a pesar de ser el que contaba con mayores recursos fiscales, mismos que debían emplearse en la consecución de una modernización acelerada del país.

En noviembre de 1950 el presidente de la Junta Militar murió en condiciones harto sospechosas; el mayor Pérez Jiménez no tomó el poder de inmediato pues todo lo señalaba como el autor del crimen, pero sin duda era la figura dominante en la nueva situación política. Dos años más tarde se celebraron elecciones con la participación de los partidos políticos no proscritos, y con la postulación para presidente de la República del citado militar a cargo del Frente Electoral Independiente. Las elecciones fueron celebradas porque se creía que serían ganadas por el FEI, ya que según la ideología oficial, los hechos hablaban de la gestión, buena o mala, de un gobierno. El gobierno militar presentaba los suficientes, por lo que consideraron que serían avalados por el voto popular. Como no sucedió así, en diciembre de 1952 Pérez Jiménez asumió la presidencia provisional con apoyo de la institución armada. En abril de 1953 fue ratificado en el cargo por la Asamblea Constituyente, con lo que legitimó su estancia en el poder.

El proyecto económico del trienio adeísta fue llevado adelante por el gobierno militar, con la salvedad de que se abandonaron los esfuerzos educativos y sanitarios que habían sido de la mayor importancia para Acción Democrática. Tampoco se permitió participación popular de ninguna especie. El acento se puso en la infraestructura, esto es, en la creación de una red vial de comunicaciones y en la instalación de industrias básicas —la hidroeléctrica y la siderúrgica del Caroní, y la petroquímica de Morón— con lo que se lograría la emancipación



económica del petróleo. El hincapié que el gobierno militar hizo en este renglón es explicado por Pérez Jiménez como sigue: "El interés especial del gobierno en el desarrollo de estas industrias básicas emana de la íntima relación que existe entre ellas, el desarrollo económico, el bienestar social y la defensa nacional".¹⁰

El afán modernizante del grupo en el poder se patentiza en la siguiente cita del mensaje del Ejecutivo al Congreso en 1954, la que a su vez da la pauta del tipo de modernización seguida en México y Venezuela: el viejo sueño liberal de convertirnos en países semejantes a los desarrollados:

Con modernos sistemas de comunicaciones terrestres; con hacer del lago de Maracaibo un mar interior; con abrir a la navegación trasatlántica el cauce del río Orinoco, con la construcción en todas las regiones del país de edificaciones de primera magnitud para escuelas, liceos, hospitales y cuarteles, así como de viviendas para las clases media y obrera; con mejorar nuestras universidades; con dar cada vez nuevas oportunidades para el capital y el trabajo, con haber logrado que la mayoría de los venezolanos esté dedicada con plenitud de fe a desarrollar la riqueza del país; con el hecho de que por las rutas internacionales del aire y del mar se haya aumentado el tránsito de aeronaves y barcos con bandera venezolana, y con la efectividad de tantas otras conquistas de bienestar colectivo, sobre las cuales no voy a hacer hincapié, es indudable que el venezolano de hoy está por encima de las condiciones deprimentes que tocaron a generaciones pasadas, se siente satisfecho y optimista y experimenta el orgullo de que otra vez el nombre de su nación y los símbolos de su patria están surgiendo con esplendor y dignidad.¹¹

Como en el régimen mexicano, se daba primordial importancia a la realización del ideal modernizador, que se expresaba en las obras materiales. El licenciado Alemán exclamaba, cada vez que inauguraba un edificio o una presa: "Estamos haciendo patria", y los militares venezolanos no se quedaban atrás en este febril entusiasmo por sentar las bases de un país "más grande, próspero y fuerte", como rezaba el "ideal nacional".

Si en nuestro país todos los esfuerzos gubernamentales se cobijaban bajo el insigne manto de la Revolución, en Venezuela el afán quedaba expresado en la doctrina oficial, que en boca de su representante se cita a continuación:

Surge, pues, de la propia realidad venezolana, a través de nuestra historia, de nuestros recursos y de nuestra ubicación como país, la evidente y sencilla verdad de que disponemos de los elementos básicos requeridos para lograr que Venezuela ocupe puesto de honor entre las naciones y para hacer de ella una Patria cada día más digna, próspera y fuerte, que es lo que convertido en indeclinable propósito hemos definido como suprema finalidad del nuevo Ideal Nacional.¹²

Como no podía ser menos, el pensamiento político del Libertador era el inspirador del régimen. El discurso oficial pregonaba que los gobiernos debían ser adecuados a las peculiares circunstancias históricas de cada país. Por ejemplo, Pérez Jiménez no dejaba de insistir en que "la justificación de un gobierno está en la producción de la mayor suma de obras tangibles de bien colectivo, racionalmente concebidas, y el cabal funcionamiento de los servicios requeridos por la colectividad nacional; haciendo todo lo anterior dentro de un ambiente de armonía ciudadana, y suprimiendo la represión o utilizándola en el menor grado posible",¹³ en clara alusión a la sentencia de Bolívar, quien en Angostura, en febrero de 1819, señalara que "El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social, y mayor suma de estabilidad política".¹⁴

La represión durante el gobierno militar (1948-1958) estuvo a la orden del día. Los partidos políticos fueron proscritos, o se movían en el estrecho margen de acción que se les permitía. La censura de prensa era tan estricta que alcanzó al mismísimo héroe de la guerra del Pacífico, el general Douglas Mac Arthur, quien en un discurso censuró los gobiernos militares. Ante la demagogia

esterilizante que —argüían— se había desatado durante la gestión adeísta, el gobierno militar se levantaba con un ideal que haría posible la realización integral de los recursos humanos y materiales de Venezuela.

El régimen trabajaba en pro de la implantación de la democracia, pero antes se tenía que dar la modernización material del país, requisito indispensable para el florecimiento de aquella. Laureano Vallenilla Lanz hijo, ideólogo del gobierno, no dejaba de señalar que el atraso, la miseria y la ignorancia generaban el despotismo. Escribía lo siguiente refiriéndose a la obra de su padre, que legitimó la dictadura de Juan Vicente Gómez:

Al escuchar mi nombre, piensan en *Cesarismo Democrático*, obra considerada por los ignorantes o las personas de mala fe como una apología de la dictadura, cuando en verdad se limita a explicar los fenómenos que la producen entre nosotros. Personalmente, aspiro para mi Patria a un régimen político y social como el de Suecia y otros países escandinavos. Pero se requiere un ambiente adecuado para lograrlo. La democracia es incompatible con la miseria física e intelectual de los pueblos subdesarrollados. Si la dictadura es un mal endémico en Venezuela, urge destruir las causas que la provocan.¹⁵

Como en el caso del gobierno mexicano, los esfuerzos modernizadores iban dirigidos a mejorar el nivel de vida de las mayorías. Vallenilla Lanz, desde el vespertino *El Heraldo*, vocero del régimen, afirmaba: "No es propósito de nuestro gobierno proletarizar a la burguesía, sino aburguesar al proletariado, es decir, proporcionar a todos la manera de llevar una vida digna, próspera y feliz."¹⁶

Durante el periodo de la dictadura perezjimenista se celebraron los veinticinco años de la aparición de *Doña Bárbara*, novela en la que Rómulo Gallegos mostró el conflicto entre civilización y barbarie, que tanto lo atormentó. En los editoriales de *El Heraldo* se asentaba que las obras efectuadas por el gobierno presidido por Pérez Jiménez eran la mejor muestra del vuelco de Venezuela hacia la civilización:

El nuevo gobierno pretende liquidar un estado de cosas admirablemente expresado en *Doña Bárbara* (...). Poco o nada queda de "Doña Bárbara" y su época de dolor y miseria. La profecía de Santos Luzardo se cumple: 'El progreso penetrará en la llanura y la barbarie retrocederá vencida'. En

efecto, el progreso ha penetrado ya en los llanos. La represa de Calabozo será la tercera del mundo y regará ciento veinte mil Has. Y éste es sólo el comienzo (...). Decididamente, hemos celebrado con brillo los veinticinco años de "Doña Bárbara".¹⁷

Durante el periodo del gobierno militar se aceleró la modernización material del país, la penetración del capital extranjero en áreas diversas al petróleo, con la consiguiente incorporación de Venezuela a la nueva estrategia trasnacional, el afianzamiento de las clases dominantes internas —sobre todo la burguesía industrial, financiera y de servicios—, se aceleró la intervención estatal en la economía para crear una infraestructura que daría independencia económica al país y que sería la base de los negocios del capital nacional y extranjero. Este proyecto se apoyó en los ingresos fiscales que no cesaron de llegar gracias a la mayor exportación del hidrocarburo, y cuando aquellos se manifestaron insuficientes, no se dudó en otorgar nuevas concesiones petroleras. Proyecto de modernización emprendido a espaldas del pueblo, desde la omnipotencia del poder, en un régimen militar policiaco donde la menor disidencia era acallada, con la oposición desaparecida o en el exilio.



El régimen militar se mostró insensible a los cambios sociales que su misma gestión modernizante había propiciado, como el crecimiento y consolidación de importantes sectores de clases medias que no podían tolerar ya la falta de libertad política y de la misma burguesía, que amplió su influencia y peso en la sociedad gracias al apoyo otorgado por la dictadura para sus procesos de acumulación, y por el sacrificio de los trabajadores, que vieron disminuir su participación en el ingreso nacional.

Para ambos gobiernos, el mexicano y el venezolano, el objetivo primordial fue el crecimiento económico que, en su concepto, lograría mejorar las condiciones de vida de la población. Efectivamente esto sucedió, pero en forma relativa, pues al calor de la dinamización económica se dio una redistribución inequitativa del ingreso, se creó una industria sustitutiva de importaciones que mostró más tarde sus límites, por ejemplo, alta dependencia del capital y de insumos importados, se afianzó el poder de las burguesías locales, que se aliaron al capital extranjero en condiciones de subordinación ante la abrumadora presencia de este en sus campos tradicionales, el Estado afianzó su vocación intervencionista y en ambos países el movimiento popular fue severamente controlado.

Los regímenes de Miguel Alemán y Marcos Pérez Jiménez configuraron una añorada "edad de oro" en lo que respecta al crecimiento económico y al

intervencionismo estatal, pero el proyecto de desarrollo implantado en esta época demostró sus límites más tarde, cuando se conformó lo que los economistas denominan un modelo "concentrador y excluyente", que ni independizó nuestras economías ni logró el bienestar social, sino todo lo contrario. El sueño modernizante de la posguerra terminó en la pesadilla de la "década perdida" de los años ochenta.

Actualmente se viven los tiempos de un nuevo proyecto, basado en el libre cambio y con hincapié en el impulso a las exportaciones y a la entrada de capital extranjero, con el resultado de que el motor del desarrollo ya no es el mercado interno, sino el externo. Con ello se busca insertar a nuestros países en las vertiginosas transformaciones del mundo actual, en una estrategia neoliberal que, se afirma, defenderá la soberanía y hará posible la justicia y la democracia tan diferidas.

En todo caso, aceptadas las correcciones a un proyecto de desarrollo que, si bien es cierto sentó las bases del México y la Venezuela modernos, resultaba insuficiente y, sobre todo, oneroso, para seguir creciendo en un contexto de viabilidad económica y con plena integración al mercado mundial, surge la legítima duda de si el nuevo programa cortará la brecha que separa a ricos y pobres en nuestros países: como en los tiempos del barón de Humboldt, la desigualdad sigue siendo la característica de las sociedades latinoamericanas •

Notas

¹ *Discursos de Alemán*, México, 1946, p. 54.

² *Ibid.*, p. 101.

³ Francisco José Paoli, *Estado y sociedad en México*, 1917-1984, México, Oceano, 1985, p. 43.

⁴ Blanca Torres, *Historia de la revolución mexicana*, 1940-1952, núm. 21, Hacia la utopía industrial, México, Colegio de México, 1984, p. 14.

⁵ Miguel Alemán, *Biografía de su obra. 1946-1952*, México, Oficina de prensa de la Presidencia de la República, 1952, pp. 11-12.

⁶ James W. Wilkie escribe acerca del interés primordial del régimen: "Alemán proyectó un gasto medio en favor de la economía que llegaba casi al 40% del presupuesto; sin embargo, llegó a gastar en desarrollo económico hasta el 51.9% del presupuesto extendido". Los gastos sociales, por su parte, fueron recortados del 21 al 17 por ciento. *La revolución mexicana (1910-1976). Gasto federal y cambio social*, México, FCE., 1978, p. 190.

⁷ Ramón Beteta, *La realidad económica mexicana*, México, México Nuevo, s/f, p. 43. (Discurso pronunciado en la XVIII Convención Nacional Bancaria, abril de 1952).

⁸ Rómulo Betancourt, *Venezuela, política y petróleo*, México, FCE,

1956, p. 289.

⁹ *Documentos que hicieron historia. Siglo y medio de vida republicana*, Caracas, Presidencia de la República, tomo II, 1962, p. 410.

¹⁰ Citado en Ladislao Tárnoi, *El nuevo ideal nacional de Venezuela. Vida y obra de Marcos Pérez Jiménez*, Madrid, Ediciones Verdad, 1954, p. 244.

¹¹ Mensaje del coronel Marcos Pérez Jiménez correspondiente al año de 1954, dirigido al Congreso Nacional, pp. 20-21.

¹² Discurso de clausura del coronel Marcos Pérez Jiménez de la Semana de la Patria en el patio de honor del Centro de Instrucción de las Fuerzas Armadas, Caracas, julio 6 de 1954, p. 9.

¹³ Marcos Pérez Jiménez, *Frente a la infamia*, Caracas, Publicación de Cruzada Cívica Nacionalista, 1968, p. 111.

¹⁴ Simón Bolívar, *Ideas fundamentales*, Caracas, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1981, p. 104.

¹⁵ Laureano Vallenilla Lanz, *Escrito de memoria*, Caracas, Ediciones Garrido, 1967, pp. 302-303.

¹⁶ Editoriales de *El Heraldo*, por R.H., Caracas, Editorial de *El Heraldo*, 1955, p. 30, 20-IX-1954.

¹⁷ Editoriales de *El Heraldo*, ob. cit., p. 29, 30-IX-1954.